

Capítulo 11

Rebecca J. McMillan

LA DEFENSA DEL AGUA PÚBLICA EN TIEMPOS DE CRISIS: EL “GOBIERNO POPULAR DEL AGUA” EN CARACAS, VENEZUELA

En Caracas, la actual crisis del agua agrava el impacto de la covid-19. A pesar del compromiso de Hidrocapital, el operador público de agua de la capital venezolana, de convertirse una empresa modélica, el suministro, la calidad y la fiabilidad del servicio de agua han ido disminuyendo desde 2014. La causa es una combinación de sequías cíclicas, infraestructuras inadecuadas y mal mantenidas, hiperinflación y disminución de los ingresos petroleros del gobierno. Las sanciones de Estados Unidos también han socavado las operaciones cotidianas de la empresa. Todos estos factores han provocado la intermitencia de los servicios de agua tanto para los residentes como para los centros sanitarios, lo que dificulta la respuesta a la pandemia. Este capítulo sostiene que la resolución de la actual crisis sanitaria también requiere abordar la crisis del agua. Una solución sostenible debe incluir inversiones públicas inmediatas en infraestructuras de agua y saneamiento, así como un compromiso renovado con la participación comunitaria y la transparencia para reforzar la gestión público-social.

INTRODUCCIÓN

En la capital de Venezuela, la crisis de agua preexistente ha dificultado la respuesta a la pandemia de covid-19.

Durante dos décadas, la empresa pública de Caracas, Hidrocapital, ha estado experimentando con un modelo único de participación pública, pero se enfrenta a retos cada vez mayores. El modelo público-social de prestación de servicios se ha visto amenazado por el deterioro de la situación política y económica, marcada por la falta de transparencia en la toma de decisiones, la hiperinflación y las sanciones estadounidenses. Las deficiencias en las infraestructuras han convertido la higiene adecuada en un reto diario para los residentes, lo que aumenta el riesgo de propagación del virus.

Con menos viajeros internacionales que en los países vecinos -sin considerar los emigrantes venezolanos que regresan a las regiones fronterizas- el gigante petrolero parece haberse librado de las altas tasas de propagación de la covid-19 que sufren otros países sudamericanos como Brasil. Venezuela también ha adoptado estrictas políticas de distanciamiento físico y se ha beneficiado de la solidaridad internacional a través de acuerdos con aliados estratégicos como China. Sin embargo, tras más de cinco años de crisis política y económica, los sistemas de respuesta del país, como el agua y la salud, ya eran vulnerables incluso antes de que llegara el virus.

Este capítulo ofrece consideraciones preliminares sobre las causas y los impactos de la crisis del agua en Caracas, y evalúa diversos aspectos de las respuestas gubernamentales, sindicales y comunitarias. Se argumenta que la resolución de la crisis sanitaria de la covid-19 pasa también por la resolución de la crisis del agua, que debe incluir inversiones públicas inmediatas en infraestructuras de agua y saneamiento, así como un compromiso renovado con la participación ciudadana y la transparencia para fortalecer la gestión público-social. El análisis se basa en la observación participante y entrevistas a informantes clave durante una investigación de campo realizada en Caracas entre agosto y diciembre de 2012 y desde abril de 2016 a diciembre de 2017. Los datos de 2020 se han recogido de fuentes secundarias y de comunicaciones personales con informantes clave.

CARACAS SIN AGUA: UNA HISTORIA INTERMINABLE

Los problemas del agua llevan mucho tiempo afectando a la capital de Venezuela, donde viven unos siete millones de personas y más de una quinta parte de la población del país. Al visitar Caracas en la década de 1950, el gran escritor latinoamericano Gabriel García Márquez escribió un cuento titulado *Caracas Sin Agua*, que podría haber sido escrito hoy.

Aunque Venezuela cumplió técnicamente el Objetivo de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento en 2001, informando de una cobertura de agua mejorada del 92%, nuestra investigación de 2012 reveló que estas altas tasas de cobertura ocultaban algunos problemas en la calidad del servicio (McMillan et al. 2014). Desde entonces, sin embargo, la situación se ha deteriorado considerablemente. La calidad y la fiabilidad del servicio han disminuido y las protestas por el agua se han convertido otra vez en acontecimientos cotidianos en Caracas, trayendo a la memoria el brutal período neoliberal de la década de 1990. El modelo de gestión público-social tiene sus raíces en los conflictos sociales de aquella época en los barrios populares. En esa época, debido a la grave escasez de agua y las interrupciones del servicio, los residentes recurrieron a soluciones informales para el suministro, organizaron bloqueos callejeros e incluso “secuestraron” a funcionarios de Hidrocapital.

Fueron en parte las profundas contradicciones sociales y económicas de la década de 1990, así como el descontento público con una élite política cada vez más desconectada, lo que provocó el auge del movimiento que culminó en la presidencia del *outsider* Hugo Chávez, un militar de izquierdas, entre 1999 y 2013. Con fuertes raíces en la sociedad civil, el gobierno de Chávez introdujo un nuevo modelo de gestión del agua que pretendía invertir las tendencias de privatización y tercerización, mejorar la participación de la comunidad y dar prioridad a las inversiones en las zonas de bajos ingresos. Junto con una plétora de otros programas sociales de la misma

época, las reformas del agua supusieron mejoras reales en la vida de muchas personas, especialmente en los barrios o asentamientos informales, que habían sido descuidados durante mucho tiempo.

Sin embargo, el proyecto político de la izquierda chavista -también conocido como la *revolución bolivariana*-, que ha continuado bajo el sucesor electo Nicolás Maduro (2014-actualidad) ha profundizado las vulnerabilidades principales de una economía dependiente del petróleo. Durante las épocas de abundancia, la planificación de los servicios públicos priorizó la obtención de recursos para las comunidades para satisfacer las necesidades inmediatas, con poca atención a la planificación y el mantenimiento a largo plazo.

Los problemas de esta estrategia se han hecho visibles tras la caída de los precios del crudo en 2014, que precipitó una crisis política y económica más profunda (Hetland 2016, Ellner y Koerner 2016a y b). Defender el agua pública en Venezuela significa reconocer los logros de este proceso, pero también asumir sus deficiencias.

El Programa Mundial de Alimentos informó en 2019 que el 25% de la población venezolana carecía de acceso sostenible al agua, mientras que 4 de cada 10 residentes sufrían cortes diarios en el suministro (PMA 2019). Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reveló que de las 2.505 protestas registradas en los primeros seis meses de 2020 -equivalentes a 14 por día- más de la mitad estaban relacionadas con los servicios básicos; en primer lugar la electricidad, seguida del agua y el gas (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social 2020). Caracas no había visto esta intensidad de protestas por el agua desde la turbulenta década de 1990.

El ya estresado sistema sanitario de Venezuela también se ha visto afectado por la crisis del agua. En un estudio reciente de los centros de salud realizado en febrero y marzo de 2020, el 31,3% de los encuestados declaró no tener acceso a agua potable, y más del 60% indicó que su acceso era limitado (Médicos Unidos Venezuela, 2020). Esta situación impide aplicar los protocolos de higiene adecuados para reducir el riesgo de propagación de la covid-19, incluyendo la capacidad de los profesionales médicos para ducharse antes de sa-

lir de los hospitales (Torres et al. 2020) de regreso a sus hogares.

EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE CARACAS

Es difícil evaluar la magnitud de los problemas de agua de Caracas, ya que el gobierno venezolano dejó de publicar las estadísticas oficiales de cobertura y calidad del agua en 2014, lo que refleja un preocupante descenso de la transparencia. Sin embargo, los estudios de organizaciones internacionales y nacionales pintan un panorama sombrío. En agosto de 2020 el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos informó que mientras el 91,7% de los residentes encuestados del país (y el 94,6% de los residentes de Caracas) tenían servicios de agua por tubería, sólo el 13,6% recibía un servicio continuo y sin cortes (OVSPa 2020).

Los servicios de agua y saneamiento en Caracas son responsabilidad de Hidrocapital, una filial regional de la empresa nacional de agua HIDROVEN. Hidrocapital, una empresa enteramente estatal, es responsable de suministrar agua al área metropolitana de Caracas y a los estados vecinos de Vargas y Miranda. La política de aguas y la regulación del servicio son competencia del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (Minaguas), creado en 2018 tras ser escindido del ministerio de Medio Ambiente. Algunas funciones de construcción e inversión en infraestructuras también son de competencia municipal.

Suministrar agua en Caracas no es tarea fácil. La ciudad está situada en un valle y carece de fuentes de agua cercanas suficientes para su población y su economía. El agua se bombea a la ciudad desde embalses lejanos a través de tres sistemas de distribución separados, denominados Tuy I, Tuy II y Tuy III. El depósito de agua de Camatagua, que alimenta a Tuy III y abastece a la mayoría de los barrios de la ladera occidental, está situado a una distancia de casi 100 km de la ciudad. El acueducto debe bombear el agua desde el nivel del mar hasta una altitud de aproximadamente 2.000 metros. Estos desafíos geográficos se ven agravados por el establecimiento

de muchos barrios informales, que poseen redes internas deficientes o improvisadas.

Investigaciones anteriores han identificado a Hidrocapital como un ejemplo de empresa pública *progresista*, dado su compromiso con el empoderamiento de los trabajadores, la participación de la comunidad a través de las Mesas Técnicas de Agua (MTA) locales y su atención a las zonas de bajos ingresos y vulnerables: todas ellas características del compromiso social declarado por el gobierno nacional (McMillan et al. 2014, Spronk et al. 2012). Este compromiso no sólo existe sobre el papel. Los residentes de los barrios o vecindarios de bajos ingresos de Caracas informan con frecuencia que, a pesar de sus muchas deficiencias, Hidrocapital tiene la presencia más regular sobre el terreno de todas las instituciones gubernamentales. Según un activista del agua entrevistado anteriormente, “¡son los únicos que vienen regularmente! Pero no pueden hacerlo todo”.

La gestión del agua está muy centralizada en Venezuela, a pesar de que la legislación nacional sobre el agua indica que la competencia para el suministro debe ser una responsabilidad municipal (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2001, 2007). Sin embargo, desde 2016, HIDROVEN ha estado descentralizando algunos aspectos de la prestación del servicio mediante el establecimiento de Salas de Gestión del Agua, que siguen en funcionamiento. Las salas son pilares de un objetivo político más amplio de transferir los sistemas locales de distribución de agua a las comunidades, incluyendo el mantenimiento y las reparaciones, el cambio de válvulas de agua y, potencialmente, incluso el cobro de las tarifas a los usuarios. Los Salas disponen de un vehículo, una computadora y un teléfono para recibir llamadas sobre problemas de agua y organizar los planes de trabajo diarios de las cuadrillas de mantenimiento de Hidrocapital asignadas a su zona.

Las Salas son el última componente de un esfuerzo a largo plazo para aumentar el papel de las comunidades en la planificación y prestación del servicio de agua. En 2001, el gobierno nacional institucionalizó la planificación participativa en sus servicios públicos

de agua mediante la promoción de oficinas de relaciones comunitarias en sus servicios y de Mesas Técnicas de Agua gestionadas por la propia comunidad. Los MTA son comités de barrio que trabajan con las empresas públicas de agua de Venezuela para planificar y ejecutar proyectos de infraestructura local y supervisar la prestación de servicios. Antes de convertirse en una política nacional en 2001, las MTA habían sido instaladas a prueba con éxito por un alcalde progresista en dos comunidades de Caracas, como respuesta a los graves problemas de agua de la década de 1990. Las MTA están a su vez afiliadas a un organismo de deliberación a escala barrial, denominado Consejos Comunales, que incluye otros subcomités dedicados a la salud, la electricidad, las telecomunicaciones, el ocio, la distribución de alimentos y otras áreas temáticas.

Además de las MTA, los vecinos están invitados a las reuniones periódicas del Consejo Comunitario del Agua (CCA), que reúne a todas las MTA de un sistema local de distribución de agua. En las reuniones periódicas del CCA, los residentes se reúnen con representantes de Hidrocapital, incluidos los promotores comunitarios asignados a cada comunidad. Los promotores son los enlaces clave entre las comunidades y el personal técnico y administrativo de la empresa. El CCA es una oportunidad para ventilar las quejas sobre el servicio, hacer un seguimiento de los planes de trabajo y discutir otros aspectos de la prestación del servicio.

En el contexto de la covid-19, algunas MTA están colaborando con medidas de respuesta, como el suministro de agua a través de camiones cisterna. Sin embargo, algunas reuniones públicas de los CCA se han suspendido indefinidamente debido a la imposibilidad de acceder a espacios públicos para las reuniones, incluso con protocolos de distanciamiento físico en vigor. Según un activista del agua de un barrio del oeste de Caracas en el que se han suspendido las reuniones sobre el agua, esto dificulta su capacidad de ejercer el control social en un momento en que se necesita con urgencia (comunicación personal, 23 de agosto de 2020).

LA SEQUÍA Y EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURAS

Teniendo en cuenta este compromiso con la reforma progresista de los servicios públicos, ¿cómo podemos entender las actuales deficiencias del agua? Podemos identificar algunas causas inmediatas, como los factores ambientales relacionados con la sequía, pero también es preciso considerar las decisiones políticas referidas al racionamiento y el déficit de infraestructuras. Estos últimos se han agravado en el entorno altamente politizado de la hiperinflación, las licitaciones irregulares y las sanciones de Estados Unidos.

Entre 2014 y 2016, Venezuela sufrió su peor sequía en medio siglo (Dutka 2016), que dejó las reservas de los principales depósitos de agua potable de Caracas en niveles peligrosamente bajos. También es famosa la interrupción de la electricidad en la capital y otras partes del país debido a la dependencia de la hidroelectricidad producida en la presa del Gurí. Nuevamente, a principios de 2020, cuando la pandemia de covid-19 golpeó a la nación caribeña, la capital experimentó un período de sequía (León 2020). Sin embargo, las raíces del problema del agua son mucho más profundas que la adversidad climática.

En respuesta a las condiciones de sequía, en 2015 Hidrocapital implementó el racionamiento de agua a través del Plan de Abastecimiento de Caracas. El racionamiento ha reducido su producción global de agua de 18-19.000 l/s a 13-14.000 l/s, con muchas de las 86 estaciones de bombeo de Caracas operando a la mitad de su capacidad (Delasio, presentación en Hidrocapital, noviembre de 2017). Sin embargo, incluso después de que los embalses se recuperaran, el plan ha seguido en vigor. Funcionarios actuales y anteriores de Hidrocapital explican que el reducido nivel de operaciones ha sobrevivido a la sequía, dadas las fugas y el mal funcionamiento de las tuberías y las averías en las estaciones de bombeo (entrevista con promotor comunitario de Hidrocapital, 14 de diciembre de 2017; entrevista con ex directivos de Hidrocapital, 21 de diciembre de

2017). Estos problemas se derivan de una combinación de dificultades para acceder a las piezas de repuesto y un mantenimiento deficiente. El funcionamiento de las bombas a la mitad de su capacidad también pasa factura a los sistemas, ya que los equipos se degradan más rápidamente cuando se apagan y se encienden.

La reducción de los niveles de servicio significa que, desde 2015, muchas comunidades que solían recibir agua de forma continua ahora reciben agua solo durante la mitad de la semana. Muchos barrios populares siempre han recibido un servicio intermitente, según lo que se llama *ciclo interno*. El ciclo interno es un plan de racionamiento de agua a nivel comunitario por el que la empresa de servicios públicos envía agua a barrios específicos según un calendario vagamente predeterminado. Las partes de la ciudad con los ciclos internos más largos han quedado exentas del plan de racionamiento. Para los que tienen un ciclo interno, los periodos sin agua pueden oscilar entre 7 y 15 días, o incluso cada 1 ‘2 meses, por lo que los residentes deben prepararse almacenando agua. Los CCA antes mencionados desempeñan un papel esencial en la supervisión de estos ciclos del agua. Los residentes ayudan a la empresa de servicios públicos informándoles si el agua no ha llegado a tiempo; la empresa, a su vez, transmite información importante sobre el ciclo en estas reuniones.

Las averías en las infraestructuras alargan los ya largos ciclos. Estos casos se han hecho más frecuentes debido a la escasez de materiales y a la reducción del presupuesto de los servicios públicos a causa de la hiperinflación. Los apagones regulares en Caracas interrumpen aun más los servicios de agua, dada la dependencia de la electricidad para su bombeo. Cuando el servicio es intermitente significa que las tuberías no están presurizadas, lo que aumenta el riesgo de contaminación del agua (entrevista, ex gerente de Hidrocapital, 21 de diciembre de 2017). Los apagones hacen aún más méll en la maquinaria cuando no existen protecciones para los reflujos de agua que dañan las tuberías y las bombas (Prodavinci 2018).

Algunos expertos sugieren que la escasez de agua podría haber-

se evitado con inversiones adicionales en el mantenimiento de las infraestructuras existentes, así como con medidas adicionales para mantener los depósitos de agua y proteger sus cuencas. Aunque los datos son poco fiables, dada la naturaleza politizada del suministro del servicio, las fuentes disponibles sostienen que, entre 2002 y 2014, el sector del agua de Venezuela sufrió un déficit de 150 millones de dólares anuales por debajo del nivel necesario para mantener la cobertura (Bausson 2018, Brin Laverde y Guevera Rey 2017). Mientras tanto, algunos expertos en agua estiman que se necesitarían entre 400 y 600 millones de dólares al año durante los próximos dos años para que la infraestructura existente en Caracas vuelva a cumplir con los estándares aceptables (CSIS 2019, Sequera y Carvajal 2020).

Las obras de infraestructura diseñadas para aumentar la capacidad del sistema de agua de Caracas también se han retrasado. En 2005, el gobierno inició la construcción de Tuy IV, un cuarto sistema de agua (que incluye una presa, un embalse y un acueducto) que habría suministrado 21.000 l/s de agua a aproximadamente dos millones de habitantes de Caracas, Valles del Tuy y Los Teques. Durante nuestra investigación en 2012, los funcionarios de Hidrocapital nos dijeron que una vez que el sistema estuviera terminado, muchos barrios recibirían agua las 24 horas del día. Aunque la finalización del megaproyecto se prometió para 2012, ha sufrido varios retrasos debido a la falta de presupuesto y a cambios en el diseño del proyecto (Bausson 2018, Observatorio de Ecología Política de Venezuela 2018). Hoy en día, sigue en gran medida estancado.

Tuy IV no es el único entre los proyectos de infraestructura venezolanos que han experimentado retrasos, sobrecostos e irregularidades. Los problemas con el diseño y la gestión de los proyectos juegan un papel importante. Bajo el mandato de Chávez, y posteriormente de Maduro, los proyectos de inversión en infraestructuras se pusieron en marcha cada vez más a través de acuerdos bilaterales con socios estratégicos como Brasil y China, en lugar de mediante procesos de contratación competitivos y transparentes (Ellner 2017). Tanto los partidarios como los críticos alegan que el gobierno

bolivariano ha negociado estos acuerdos para dejar de lado a sectores del capital nacional que consideraba cómplices de actividades antigubernamentales (por ejemplo, el golpe de Estado ilegal fallido de 2002), para forjar alianzas contrahegemónicas como contrapeso a la presencia estadounidense en la región, y para mover el dinero lo más rápidamente posible. Sin embargo, la disminución de la supervisión pública también ha fomentado la corrupción y las decisiones de planificación apresuradas, lo que ha llevado a proyectos de infraestructura de tipo elefante blanco (Ellner 2017; López Maya 2018; funcionario de un banco de desarrollo, comunicación personal, 16 de mayo de 2016).

Las sanciones económicas han obstaculizado aún más las operaciones cotidianas de Hidrocapital. A partir de 2019, las sanciones de Estados Unidos han prohibido a las empresas extranjeras comerciar con entidades estatales venezolanas y han bloqueado el acceso del país a los mercados financieros internacionales. Una serie de activos venezolanos en el extranjero también han sido bloqueados desde 2018, incluida la filial petrolera venezolana con sede en Estados Unidos, CITGO, valorada en aproximadamente 7.000 millones de dólares, así como oro por valor de 1.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra (Dobson 2020a). El analista económico Francisco Rodríguez ha señalado que el acceso a estos fondos podría haber proporcionado un apoyo crucial para la respuesta del país a la covid-19 (Dobson 2020a). Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rechazó una solicitud de préstamo de 5.000 millones de dólares durante la pandemia, supuestamente debido a la incertidumbre sobre la legitimidad de la presidencia de Maduro (Dobson 2020a).

En el sector del agua, las sanciones han paralizado la capacidad del gobierno para importar las piezas de repuesto necesarias para arreglar las bombas y tuberías rotas debido a la falta de reservas extranjeras. Como explicó en 2019 la entonces vicepresidenta de Hidrocapital, María Flores, “con el bloqueo, hemos tenido situaciones en las que tenemos las bombas y los motores y están a punto de

enviarse y entonces viene la mano todopoderosa de Estados Unidos y bloquean el dinero en el banco o sancionan a la empresa que está trabajando con nosotros, solo por vendernos estos equipos y sin ver que están afectando la vida de la gente” (citado en Fox 2019). La falta de materiales, equipos y vehículos provoca más retrasos en los ya largos ciclos internos del agua dentro de los barrios, porque el agua se redirige a los diferentes sectores de forma manual a través de un elaborado sistema de válvulas. Si los técnicos de Hidrocapital no pueden acceder a los vehículos para cambiar las válvulas, significa que las comunidades no reciben el agua a tiempo. Las comunidades que se mantienen con acceso al servicio también se ven afectadas negativamente, ya que las fugas en las tuberías provocan inundaciones cuando el agua se mantiene demasiado tiempo en el sector.

USUARIOS, VENEDORES PRIVADOS E INGENIERÍA POPULAR

¿Cómo afrontan los usuarios esta nueva realidad? Una encuesta nacional realizada durante la pandemia revela que al menos el 56,7% de los encuestados almacena agua, el 18,5% paga por el agua de camiones cisterna privados, el 12,0% recoge agua de otros sitios y el 10,5% compra agua embotellada (OVSP 2020b).

Aunque la crisis del agua ha afectado indudablemente a todos los caraqueños, algunos residentes están en mejores condiciones de pagar o tienen mayor capacidad de almacenamiento de agua para capear las largas interrupciones del suministro. Por ejemplo, la investigación etnográfica de campo realizada en 2017 indica que muchos de los residentes de los distritos ricos de Caracas, Altamira y Los Palos Grandes, en el este, también se enfrentan a servicios de agua intermitentes (el agua llega unos pocos días a la semana), pero los edificios y apartamentos individuales suelen tener grandes tanques de agua para almacenarla. Otros residentes de clase media y alta supuestamente han construido ilegalmente pozos privados en sus propiedades (Smith 2018). En los barrios populares, algunos residentes tienen tanques de almacenamiento en los tejados, mien-

tras que los que están acostumbrados a un servicio más regular nunca han tenido que invertir en el almacenamiento y ahora deben ingeniarse para llenar cualquier recipiente que puedan encontrar.

A falta de agua corriente pública regular o de instalaciones modernas de almacenamiento, como los depósitos de agua, los residentes de los sectores de bajos ingresos que deben salir de sus casas para comprar agua o recogerla de arroyos y manantiales de dudosa calidad se enfrentan al mayor riesgo para la salud. Además de los problemas de contaminación, estos residentes no pueden seguir las recomendaciones de salud pública de permanecer en casa para detener la propagación del virus. Mientras tanto, tener que gastar los escasos recursos en la compra de agua a proveedores privados es una pesada carga para los venezolanos que sufren una prolongada crisis económica. Un nuevo impuesto sobre el agua embotellada ha elevado incluso más los costes de lo que ya es un artículo de consumo cotidiano esencial (Voces Por el Agua 2020).

Otros informes destacan casos de *ingeniería popular* en sectores de bajos ingresos, con residentes que cavan pozos poco profundos o adoptan medidas aún más extremas. Las comunidades cercanas a la autopista Cota Mil de Caracas han tomado cartas en el asunto tras meses sin agua durante la pandemia (Gibelli 2020). Los vecinos improvisaron su propio sistema de agua, aprovechando los túneles abandonados llenos de agua de un proyecto de construcción de la autopista en las estribaciones de la montaña Waraira Repano (comúnmente conocida como El Ávila). Construyeron un sistema de tuberías que lleva el agua a su comunidad por gravedad. El agua llega a un grifo comunitario conectado a una larga manguera. A cada familia se le asignan determinados días y horas para recoger el agua del grifo, lo que evita tener que esperar a los camiones cisterna o comprar agua. Aunque heroicas, estas soluciones artesanales también son peligrosas, dada la preocupación por la seguridad del suministro de agua, así como los riesgos para la seguridad de la comunidad durante el proceso de construcción del sistema de distribución del agua.

LA RESPUESTA A LA COVID-19

En respuesta a la covid-19, la empresa pública, los gobiernos municipales y el ministerio nacional del agua han adoptado un enfoque múltiple. El 22 de marzo de 2020 el gobierno anunció una moratoria de seis meses en los cortes de servicios básicos por impago para ayudar a los residentes afectados por la pandemia (Infobae 2020). Otro pilar fundamental de las medidas de emergencia ha sido la ampliación de la flota de camiones cisterna gestionados por las empresas de agua y los municipios. Cada día, un pequeño ejército de camiones cisterna sale a las calles de Caracas para abastecer de agua a los barrios con acceso más irregular, así como a las instalaciones esenciales como los centros de salud, los lugares de testeo de la covid-19 y los hoteles con viajeros en cuarentena.

El gobierno nacional ha importado más de 1.000 nuevos camiones cisterna a través de acuerdos con China y México, a través del intercambio de petróleo por alimentos y otros bienes (*El Nacional* 2020, Martínez y Marianna Párraga 2020). En Caracas, tanto Hidrocapital como la municipalidad entrega agua por medio de camiones cisterna. A finales de agosto de 2020, a través del Plan Agua Caracas, la municipalidad está distribuyendo al menos un millón de litros de agua al día con 23 camiones cisterna regulares, 18 supercisternas con una capacidad de 35.000 litros y 5 camiones de 10.000 litros (VTV 2020). La distribución se realiza en colaboración con las MTA locales para determinar las zonas necesitadas. A diferencia de sus costosos equivalentes privados, las entregas por medio de los camiones cisterna públicos son gratuitas. Aunque los camiones cisterna constituyen un importante salvavidas durante la pandemia, algunos expertos en agua sugieren que el reparto de agua en camiones cisterna es económicamente ineficiente e inadecuado para satisfacer las necesidades diarias (Sofía García 2020). Además, durante la covid-19, la espera en la cola para recoger el agua de los camiones cisterna puede crear un riesgo adicional de propagación

para los usuarios y los trabajadores del servicio.

Los venezolanos con conexiones formales de agua y saneamiento se han beneficiado tradicionalmente de tarifas bajas y subvencionadas para los servicios públicos. Los residentes de ciertos barrios de Caracas se benefician de una reducción adicional de las tarifas en virtud de una *tarifa social*, mientras que a los residentes de los barrios con servicios muy deficientes no se les cobra nada. Las tarifas del agua son volumétricas, pero se basan en un uso estimado del agua, ya que la mayoría de los hogares de Caracas no tienen contador.

Como parte de un compromiso del gobierno con los servicios públicos asequibles, las tarifas se congelaron entre los años 2004 y 2009 y luego nuevamente desde 2011 a 2018 (funcionario de la Subgerencia Comercial Metropolitano de Hidrocapital, comunicación personal, 2 de noviembre de 2017; Bausson, 2018), pero desde entonces se han incrementado en respuesta a la inflación. En mayo de 2020, a principios de la pandemia, Hidrocapital habría aumentado aun más las tarifas. Los aumentos habrían llegado hasta 19.000% (*El Universal* 2020), afectando más a los usuarios comerciales que a los residenciales (periodista venezolano, comunicación personal, 23 de agosto de 2020). Sin embargo, es difícil encontrar información oficial sobre el aumento.

Algunos analistas han criticado la decisión de la empresa de aumentar las tarifas en un contexto de pandemia y caída de la calidad del servicio (*El Universal* 2020). Sin embargo, para otros, estas medidas son muy necesarias. Un estudio realizado en 2018 reveló que las tarifas de agua de Caracas estaban por debajo de las de otras grandes ciudades de la región hasta en un 4,349-27,460% (Prodavinci 2018). En el año 2016 los activistas de los MTA ya abogaban por un aumento de las tarifas, con la esperanza de que tales reformas fortalecieran el servicio público y redujeran su dependencia de proveedores privados más caros. Funcionarios de Hidrocapital señalaron que en 2017 menos del 5% del presupuesto del servicio público provenía de las tarifas de los usuarios (funcionario de la Subgerencia

Comercial Metropolitano de Hidrocapital, comunicación personal, 2 de noviembre de 2017).

Definir una estructura tarifaria adecuada es complicado, dada la desconexión entre las economías basadas en el bolívar y en el dólar, ya que el país está procesando una transición gradual a la dolarización (aunque no sea reconocido oficialmente). Mientras que muchos gastos de servicios públicos -como la importación de insumos- deben pagarse en dólares, los salarios oficiales siguen pagándose en bolívares. Durante años, el gobierno subvencionó las importaciones con los ingresos del petróleo, lo que permitió que los precios de bienes, servicios y salarios se mantuvieran artificialmente bajos. Si bien esto ahogó la producción nacional, mantuvo la estabilidad mientras las reservas de petróleo pudieron sostener el sistema de subsidios. Hoy en día, cuando los alimentos y otras necesidades se ajustan a los precios *reales* del mercado y se comercializan cada vez más en dólares, los residentes que reciben ingresos en moneda local tienen dificultades para llegar a fin de mes. Esta desconexión entre los ingresos y el coste de la vida también dificulta que la empresa de servicios públicos cobre de tarifas de agua que podrían aportar ingresos significativos a la empresa.

Un camino futuro, que ayudaría a redistribuir la riqueza, sería una revisión de los sistemas tarifarios para proporcionar una subvención cruzada más significativa entre usuarios ricos y los pobres, del tipo de la estructura tarifaria de OSE en Uruguay (Spronk 2010, Spronk et al. 2014, Chavez et al. en este mismo volumen).

Para dar un ejemplo que apoya la necesidad de la reforma, el diario *El Universal* (2020) informaba que, en mayo de 2020, un apartamento en el centro de la ciudad de Caracas había tenido un aumento mensual en su factura de agua de VES1.200 a VES40.000. El 24 de agosto de 2020, la tasa de cambio oficial del dólar estadounidense era de 307.000 VES -¡lo que significa que 40.000 VES equivalen a unos pocos centavos! Sin embargo, si alguien gana el salario mínimo de 400.000 VES (más otros 400.000 en créditos para alimentos), eso supone destinar el 10% de de sus ingresos mensuales en efecti-

vo en el pago del agua corriente. Es posible que que deba complementar este gasto con agua embotellada, dada la dudosa calidad del agua en algunas zonas.

En cuanto a las respuestas a largo plazo a la crisis, el gobierno ha anunciado recientemente un nuevo Plan Nacional de Aguas para hacer frente a las amenazas combinadas del deficiente suministro de agua y de la covid-19. Es de esperar que esto traiga consigo una atención renovada y una inversión muy necesaria para el sector. Es probable que esta última tenga que proceder de diversas fuentes, incluida una posible reforma fiscal. Las consultas públicas y a los trabajadores para el diseño plan se celebraron en agosto de 2020. Aunque los detalles de las medidas concretas siguen siendo escasos, la Ministra del Agua, Evelyn Vásquez, ha explicado que el plan contiene seis ejes, que incluyen:

1. reforzar las mesas técnicas y los consejos comunitarios del agua y definir soluciones locales;
2. reforzar y preservar la soberanía del sistema de agua mediante la reparación y estabilización del sistema;
3. reforzar la seguridad del sistema de agua en colaboración con el ejército y la policía;
4. promover la educación, la innovación y la tecnología para estimular la producción local de componentes y la formación de expertos locales en materia de agua;
5. acelerar la transformación del modelo de gestión, incluida la transferencia de servicios a las comunidades y la creación de consejos de producción autogestionados por los trabajadores;
6. la mejora de la recogida y producción de agua, incluida la conservación del agua (Álvarez 2020).

LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES DEL AGUA A LA CRISIS

Los trabajadores de Hidrocapital están ubicados en la primera línea de contención de la pandemia de covid-19 y mantienen un fuerte

compromiso con el servicio público, a pesar del grave deterioro de las condiciones laborales y de los salarios reales de todos los trabajadores del sector público en Venezuela. Los empleados de HIDROVEN y sus filiales como Hidrocapital están sindicalizados a través de la Federación de Sindicatos de las Empresas Hidrológicas de la República Bolivariana de Venezuela (FESIEMHIDROVEN). Durante la covid-19, los trabajadores de Hidrocapital están protegidos por las medidas laborales especiales que el gobierno ha aprobado para responder a la pandemia. Por ejemplo, se han prohibido los despidos laborales como consecuencia del confinamiento, y todos los trabajadores del sector público y privado reciben una bonificación especial del gobierno (Dobson 2020b). Las mascarillas son obligatorias en Venezuela, y el gobierno nacional ha desplegado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR) para desinfectar regularmente los espacios públicos, incluidas las oficinas de Hidrocapital y las estaciones de bombeo. Además, los equipos limpian otras oficinas gubernamentales, aeropuertos, terminales de autobuses y del metro, plazas públicas, calles, mercados y otras zonas de alto tráfico (Ciudad CCS / VTV 2020).

A pesar de estas protecciones, existe una gran preocupación por el deterioro de la situación económica agravado por la pandemia. Al igual que los demás sindicatos del sector público, el sindicato del agua se lamenta de que sus salarios no se hayan mantenido a la altura de los retos de una economía cada vez más cara y dolarizada. En un comunicado público fechado el 7 de mayo de 2020, el sindicato de trabajadores del agua denunció un “grave deterioro” de las condiciones de los trabajadores actuales y jubilados en el contexto de la crisis de la covid-19. Su principal queja: que sus salarios básicos y la bonificación especial no cubrían su coste de vida básico, mientras que la cestas de alimentos (una prestación garantizada a los trabajadores) no llegaba (FEDESIEMHIDROVEN 2020).

Entre otras preocupaciones, estaban la falta de transporte y equipamiento para los trabajadores, y otras disposiciones de seguridad. Este ha sido un problema constante en un país con recursos

limitados en medio de la escasez de ingresos y las sanciones. Durante nuestra investigación de campo en los años 2016 y 2017, los trabajadores de Hidrocapital utilizaban el transporte público y tomaban prestados los vehículos de miembros de la comunidad para realizar las reparaciones más necesarias o cambiar las válvulas de agua, ya que la flota de la empresa estaba en mal estado debido a la escasez de piezas de vehículos, baterías y aceite para motores. Muchos trabajadores expresaron su preocupación por la seguridad personal y la responsabilidad, dado que los vehículos comunitarios no están asegurados.

Hasta hace poco, Hidrocapital subcontractaba muchas de sus funciones operativas, incluida la gestión de sus estaciones de bombeo de Caracas, a *cooperativas* privadas. Desde 2014, la empresa de servicios públicos ha asumido estas funciones, absorbiendo a muchos de los miembros del personal de las cooperativas originales. En teoría, esta medida refuerza al sindicato del sector público e incorpora a los trabajadores a la estructura de beneficios del gobierno. Sin embargo, en 2016-2017, los trabajadores también denunciaron graves problemas con esta transición. Muchos de los vehículos y otros equipos pertenecían al proveedor privado, que los embargó tras la transición. Los trabajadores informaron de que algunos días se quedaban tirados en la base, sin poder realizar las reparaciones necesarias. Como comentó un gerente de Hidrocapital en 2017, “antes, cuando los trabajadores tenían sus cooperativas, era mantequilla. Ahora, tengo que hacerme cargo de mis trabajadores para todo... botas, uniformes...” (reunión de las Salas de Gestión del Agua, Hidrocapital, 1 de diciembre de 2017).

También había preocupación por la seguridad de los trabajadores incluso antes de que llegara la pandemia. La muerte de un trabajador en 2018 suscitó serias preocupaciones sobre los protocolos de seguridad (Meneses 2018). La realización de trabajos en los barrios también puede presentar riesgos de seguridad por violencia o robo. Mientras visitaban una estación de bombeo en El Valle (una parroquia occidental que alberga muchos barrios) en 2017, por

ejemplo, los trabajadores informaron del robo de los componentes de cobre de la estación de bombeo. Otros han denunciado haber sido amenazados a punta de pistola o haber sufrido el secuestro de vehículos. Supuestamente, en parte debido a los riesgos de violencia y criminalidad, el gobierno comenzó a pilotear un programa de capacitación y reclutamiento para contratar operadores locales de la zona bajo lo que describieron como una “brigada comunitaria.”

Durante la pandemia, los trabajadores han exigido un mayor papel en la gobernanza de los servicios públicos de agua. Mientras que los trabajadores de Hidrocapital ya tienen varios espacios para la participación y la autoformación, el sindicato ha pedido la creación de Consejos Productivos de Trabajadores en el sector de operaciones de todas las empresas de servicios públicos (FEDESIEMHIDROVEN 2020). Según la ley venezolana, las empresas venezolanas públicas y privadas deben tener al menos un consejo (Asamblea Nacional Constituyente 2018). Su función es evaluar y supervisar la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios en interés del pueblo. Algunas empresas de servicios públicos, como Hidrofalcón en el occidental estado Falcón, ya cuentan con consejos funcionando, mientras que en otras estos espacios están en desarrollo.

CONCLUSIÓN

Lo que está en juego en este momento no es sólo la salud y el bienestar de la población, sino también la orientación futura de los servicios públicos de Venezuela. Dada la alta tasa de dependencia de los proveedores privados y de las medidas de autoayuda para el acceso al agua, HIDROVEN e Hidrocapital requieren una inyección de recursos muy urgent para mantener las estaciones de bombeo y las tuberías y restaurar las obras de infraestructura abandonadas. La austeridad causada por la crisis corre el riesgo de vaciar la empresa pública y revertir aún más los logros de la era de Chávez. Para hacer frente a la crisis agravada por la covid-19 será necesario:

Transparencia y comunicación:

- La falta de transparencia sobre la calidad y la cantidad del agua y otras operaciones del servicio público socava el carácter social y público del mismo. También puede generar desconfianza en el servicio en un contexto en el que puede haber razones legítimas para los cortes u otros problemas del suministro.
- La transparencia en la toma de decisiones y en los planes de inversión contribuirá a aumentar la confianza en el servicio público en un momento en que la confianza en la gestión gubernamental es baja.

Inversión en infraestructura:

- Expertos en ingeniería y gestión de servicios de agua destacan la necesidad de invertir en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras existentes a corto plazo, en lugar de construir otras nuevas. A largo plazo, un plan de inversiones debería guiar la toma de decisiones en el futuro. El debate público sobre estos planes y sobre la reforma de las tarifas y los mecanismos de financiación alternativos reforzaría el carácter social y público de la empresa..

Protección de los trabajadores:

- Los trabajadores de Hidrocapital se encuentran en una situación difícil y reclaman una mayor protección de la plantilla de la empresa y mayor incidencia en la gobernanza de los servicios de agua.

Participación comunitaria:

- La participación de la comunidad, con las debidas precauciones, es esencial durante la pandemia, dada la necesidad de supervisar las respuestas a la crisis.
- Es necesario un diálogo público sobre las reformas tarifarias y los mecanismos de financiación alternativos, incluidos los planes de subvención cruzada.

Solidaridad internacional y rechazo de las sanciones:

- El servicio de agua de Venezuela y las posibilidades de recu-

peración después de la covid-19 han sido socavados por las sanciones extranjera. En el espíritu de la solidaridad internacionalista, los defensores de los servicios públicos deben ofrecer un apoyo crítico al abogar contra las sanciones punitivas impuestas por los gobiernos de sus países de origen.

Dada la rápida evolución de la crisis actual, es necesario investigar más en profundidad la gestión pública del agua en Venezuela, especialmente en las ciudades más pequeñas y en las zonas rurales. La crisis combinada del agua, la salud, la política y la economía en Caracas ilustra la importancia de unos servicios públicos bien gestionados y transparentes para la salud, la equidad social y la democracia. Si bien este capítulo dibuja un panorama sombrío, también muestra que, contra todo pronóstico, la lucha por un modelo social-público de provisión pública persiste. En palabras de un activista comunitario del agua: “el agua es vital, y ahora más que nunca va a depender de todos nosotros, unidos”.

REFERENCIAS

- Acuña Orta, M. Y Martínez Perdomo, M. 2018. Alfred De Zayas: Venezuela Must Take the US to the International Court of Justice. *Venezuela Analysis*. 28 de marzo. <https://venezuelanalysis.com/analysis/13745> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Alvarez, Y. 2020. Evelyn Vásquez: ‘El Plan Nacional para el Sistema Hídrico consiste en seis ejes de acción transversal, con Mapa de Soluciones. *AlfaYaracuy*. 13 de julio. <https://bit.ly/3jzqDZi> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Asamblea Nacional Constituyente. 2018. Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (LCCPT). *Gaceta Oficial* N° 41.336. 6 de febrero.
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 2007. Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica para la Prestación de Servicios de Agua Potable y de Saneamiento. *Gaceta Oficial* N°38.763. 6 de setiembre.
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 2001. Ley Or-

- gánica para la Prestación de Servicios de Agua Potable y de Saneamiento. *Gaceta Oficial* N°5.568. 31 de diciembre.
- Bausson, N. 2018. Ahogados en la indolencia: Ineficiencia, improvisación y desidia. Sector de Agua Potable y Saneamiento. Caracas: Transparencia Venezuela.
- Brin Laverde, M. and Guevera Rey, C. 2017. Propuesta para un plan nacional de infraestructura 2018-2030. Caracas: Cámara Venezolana de la Construcción.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2019. Unraveling the water crisis in Venezuela. *CSIS Briefs*. <https://bit.ly/31P9R2p> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Ciudad CCS / Alcaldía de Caracas. 2020. Plan Agua para Caracas distribuye más de 1 millón de litros por día. 20 de agosto. <https://bit.ly/3oq23hc> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Ciudad CCS / VTV. 2020. Sistema Nacional de Gestión de Riesgo realiza desinfección en Hidrocapital. 23 de abril. <https://bit.ly/34zyFgO> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Dobson, P. 2020a. China sense sixth COVID-19 aid installments as Venezuela thanks ‘true friends.’ *Venezuela Analysis*. 8 de junio. <https://venezuelanalysis.com/news/14901> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Dobson, P. 2020b. Venezuela announces 6-month rent suspension, guarantees workers’ wages, bans lay-offs. *People’s World*. 24 de marzo. <https://bit.ly/37Ib9jy> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Dutka, Z.C. 2016. Venezuela faces its worst drought in 47 years. *Venezuela Analysis*. 19 de enero. <https://venezuelanalysis.com/news/11822> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- El Nacional. 2020. Régimen pretende solventar las fallas de servicio de agua con 252 “supercisternas” traídas de China. 17 de mayo. <https://bit.ly/3mrrrkP> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- El Universal. 2020. Caraqueños llaman a no pagar tarifas de Hidrocapital en protesta por falta de agua. 17 de mayo. <https://bit.ly/3e2Jr26> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Ellner, S. 2017. Venezuela’s fragile revolution. *Monthly Review*. 1 de octubre. <https://bit.ly/37HeuPT> (consultado el 10 de agosto de 2020).

- Ellner, S. y Koerner, L. 2016a. Steve Ellner: Democratization of PSUV is key to Chavismo's future. *Venezuela Analysis*. 10 de octubre. <https://venezuelanalysis.com/analysis/12716> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Ellner, S. y Koerner, L. 2016b. Steve Ellner Part II: Is the Bolivarian Revolution a populist failure? *Venezuela Analysis*. 17 de octubre. <https://venezuelanalysis.com/analysis/12723%20> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- FEDESIEMHIDROEN (2020). Federación de Sindicatos de las Empresas Hidrológicas de la Republica Bolivariana de Venezuela: Comunicado a la atención de Evelyn Vásquez, Presidenta de Hidroven. 7 de mayo (consultado en Twitter, 20 de August de 2020).
- Fox, M. 2019. The human cost of the US sanctions on Venezuela. *DW*. <https://bit.ly/2HBdl1o> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Garcia, S. 2020. Las cisternas que llegaron desde China son una gota de agua en el desierto. *Crónica Uno*. 19 de mayo. <https://bit.ly/2HJ2dze> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Gibelli, M. 2020. Ingeniería popular se impone para conseguir agua en Caracas. *Sputnik*. 18 de junio. <https://bit.ly/2G3LlmD> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Hetland, G. 2016. Chavismo in Crisis. *NACLA Report on the Americas* 48(1): 8-11.
- Infobae. 2020. Cómo funcionará la prohibición de cortar los servicios públicos por falta de pago. 26 de marzo. <https://bit.ly/2TvLy5c> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- León, D. 2020. Las dimensiones de la crisis del agua en Venezuela. *El Diario*. 29 de mayo. <https://bit.ly/35GaQmv> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- López Maya, M. 2018. Populism, 21st-century socialism and corruption in Venezuela. *Thesis Eleven* 149(1): 67-83.
- McMillan, R., Spronk, S. y Caswell, C. 2014. Popular participation, equity, and co-production of water and sanitation services in Caracas, Venezuela, *Water International* 39(2): 201-215.
- Martínez, A.I. y Párraga, M. 2020. Venezuela recibe camiones cisterna para agua de firmas mexicanas bajo acuerdo de petróleo por alimentos. *Reuters*. 14 de abril. <https://reut.rs/37Ol9U> (consultado el 10 de agosto de 2020).

- 2020).
- Médicos Unidos de Venezuela. 2020. *Encuesta nacional de Medicos Unidos de Venezuela sobre capacidades del sistema de salud para afrontar la posible epidemia de COVID-19 en nuestro país*. Caracas: Médicos Unidos de Venezuela.
- Meneses, D. 2018. Trabajadores de Hidrocapital exigen equipos e implementos de seguridad. *El Universal*. 2 de abril. <https://bit.ly/2TAlxBr> Médicos Unidos de Venezuela
- Observatorio de Ecología Política de Venezuela. 2018. Proyecto de presa en el río Cuira Sistema Tuy IV. 19 de enero. <https://bit.ly/3jse2qU> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 2020. Conflictividad Social en Venezuela durante el primer semestre 2020. 17 de julio. <https://bit.ly/2G3gCpL> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- OSVP. 2020a. OVSP: principales ciudades del país no cuentan con el servicio de agua potable suficiente para sus rutinas. 6 de agosto. <https://bit.ly/2HFtId0> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- OSVP. 2020b. OVSP revela las prácticas alternativas de los ciudadanos ante deficiencia de servicios públicos. 14 de agosto. <https://bit.ly/35CJGNF> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Prodavinci. 2018. Vivir sin agua. <http://factor.prodavinci.com/vivirsinagua/index.html> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Sequera, V. y Carvajal, J. 2020. For Venezuelans, a key obstacle for handwashing during a pandemic—no running water. *Reuters*. 4 de junio. <https://reut.rs/34xtPkb> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Smith, S. 2018. Venezuela's wealthy beat water crisis drilling private wells. *AP News*. 26 de junio. <https://bit.ly/34wPrge> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Spronk, S., Crespo, C. y Olivera, M. 2012. Struggles for Water Justice in Latin America: Public and 'Social-public' Alternatives. En MacDonald D.A. and Ruiters G. (Eds), *Alternatives to Privatization: Public Options for Essential Services in the Global South*, 421-452. Nueva York: Routledge.
- Spronk, S., Crespo C. y Olivera M. (2014). Modernization and the boundaries of public water in Uruguay. En McDonald, D.A. (Ed.), *Rethinking*

- Corporatization and Public Services in the Global South*, 107-35. Londres: Zed Books.
- Spronk, S. 2010. Water and Sanitation Utilities in the Global South: Re-centering the Debate on 'Efficiency.' *Radical Review of Political Economics* 42(2): 156-174.
- Tal Cual. 2020. ¿Por qué Caracas se queda sin agua teniendo un acueducto? May 14. <https://bit.ly/31Mi47C> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Torrealba, C.G. 2020. Maduro da un giro neoliberal en Venezuela? *La Silla Rota*. 29 de marzo. <https://bit.ly/3jCdc8> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- VTV. 2020. Plan Agua para Caracas distribuye más de 1 millón de litros por día en comunidades, CDI, hoteles sanitarios y hospitales centinelas. 20 de agosto. <https://bit.ly/2Tt34qB> (consultado el 28 de agosto de 2020).
- Voces Por el Agua. 2020. En Venezuela ahora se paga impuesto por el agua mineral. 17 de marzo. <https://bit.ly/2HFuJlk> (consultado el 10 de agosto de 2020).
- Weisbrot, M. y Sachs, J. 2019. *Economic sanctions as collective punishment: The case of Venezuela*. Washington, DC: Center for Economic and Policy Research (CEPR).
- World Food Programme (WFP). 2020. Venezuela food security assessment main findings. <https://bit.ly/3ktyqt3> (consultado el 10 de agosto de 2020).